

ESPAÑA EN TIEMPOS DE CÓLERA

Juan Manuel Aragüés

Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza

La pandemia que está azotando al planeta lo ha hecho con especial virulencia en España, donde las cifras de infectados y fallecidos han crecido de modo exponencial durante las últimas semanas, aunque parece, cuando redacto estas líneas, que la tendencia comienza a ser controlada y que se diseña una cierta esperanza en el horizonte. Esta crisis sanitaria ha venido a coincidir con una situación política inédita en la actual democracia española, pues en los cuarenta años de su existencia nunca se había producido un Gobierno de coalición. Hay que remontarse a febrero de 1936 para encontrar el más cercano Gobierno de coalición en nuestro país, el de un Frente Popular que tuvo que plantar cara, solo cinco meses después, a un golpe de Estado fascista que desembocó en la Guerra Civil.

En un artículo sobre la situación de España en tiempos del coronavirus pudiera parece que la referencia a la Guerra Civil no pasara de ser una anécdota. Y sin embargo, no lo es. Hay que recordar que España viene viviendo desde hace unos años una profunda crisis territorial como consecuencia de las ansias independentistas del nacionalismo catalán, contestadas con enorme virulencia por el nacionalismo españolista de la derecha. Dos derechas, las nacionalistas catalana y española, que comparten un mismo proyecto social neoliberal, pero enfrentadas a muerte en la cuestión territorial. Esa crisis que ha venido viviendo España durante estos últimos años ha sacado a la luz un nacionalismo español ultramontano, reaccionario y furibundo que ha perdido todos sus complejos, también todas sus cautelas, y ha articulado un discurso enormemente agresivo que ha emponzoñado la convivencia en el país. Hubiera parecido lógico que, ante la gravísima situación generada, todo el espectro político hubiera decidido aparcar diferencias para afrontar de manera unitaria la pandemia. Pero, si la epidemia ha provocado, ciertamente, que el conflicto territorial haya desaparecido de la agenda política y de las preocupaciones de la inmensa mayoría de la ciudadanía, sin embargo la visceralidad de las derechas ha permanecido intacta, de tal modo que, lejos de apoyar al Gobierno en esta excepcional situación, han mantenido un tono crispado, hiperbólico, desmesurado, con la intención de socavar al Gobierno de coalición, al que algunos llaman <comunista>, <bolivariano>, incluso <soviético>. Creo no exagerar si digo que muchos ciudadanos españoles hemos entendido ahora, más de ochenta años después, por qué en nuestro país se produjo una Guerra Civil,

al descubrir el verdadero rostro de una derecha que, realmente, produce miedo, que incluso, en el proceso de investidura del actual Gobierno, llegó a llamar al ejército a reeditar un golpe de Estado.

Este es el contexto político en el que el país ha debido hacer frente a la pandemia. Y ello con un Gobierno recién constituido, con dos formaciones que se vigilan de reojo, sin experiencia de colaboración y con un cierto historial de enfrentamientos. No parecía ser, desde luego, la mejor situación. Sin embargo, el Gobierno no solo ha afrontado con decisión la situación sanitaria, sino que no ha olvidado la dimensión social de su pacto de gobierno. No cabe duda de que la crisis sanitaria lleva aparejada una profunda crisis social y económica, con el cese de actividad de numerosos sectores productivos y de servicios, lo que, evidentemente, perjudica a la economía nacional y deja en una situación tremendamente complicada a buena parte de la población, cuyos trabajos no pueden ser desempeñados. La precarización social y la destrucción de empleo se han acentuado hasta límites impensables hace unos meses. Ante esta situación, el Gobierno ha implementado una serie de medidas de profundo calado social para proteger a los sectores más desprotegidos en estos momentos. Así, se han declarado moratorias en los pagos de alquileres e hipotecas, se han prohibido los desahucios durante seis meses, se ha establecido la renovación automática de los alquileres que vencieran en este periodo, se ha promovido un bono social eléctrico y se ha prohibido el corte de suministros básicos como agua y electricidad, se ha implementado un subsidio temporal extraordinario para empleadas del hogar, una moratoria en el pago de cotizaciones de los autónomos y un largo etcétera de medidas. Quizá quepa subrayar, además, para el periodo de cese de toda actividad no considerada como esencial, y que se decretó hace unos días y se prolongará, como mínimo, hasta el 11 de abril, un permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores que cesan la actividad en este momento y que obliga a las empresas a mantenerles el salario y a los trabajadores y trabajadoras a recuperar posteriormente esas jornadas perdidas. En fin, todas medidas para garantizar la supervivencia de amplios sectores sociales expuestos ante la crisis. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, declaraba en una entrevista que el Gobierno está trabajando en un ingreso mínimo vital a marchas forzadas.

Es decir que, dada la gravedad de la situación, el Gobierno está implicado en una política de atención a una mayoría social vulnerable. Y ello a pesar de los furibundos ataques de la derecha, ya reseñados, y de amplias operaciones de los sectores económicos que ven con extrema preocupación esa deriva social del Gobierno a la que, obviamente, no

están acostumbrados. La derecha política, económica y mediática viene articulando, desde el comienzo de la crisis, diferentes estrategias para erosionar al Gobierno de coalición. La primera de ellas ha sido sugerir cambios de alianzas que llevaran al PSOE a deshacerse de sus socios de Unidas Podemos, la parte del Gobierno que realmente preocupa a estos sectores, para sustituirlos por alguno o algunos de los partidos de la derecha. Algo que ya se intentó en los diferentes procesos de negociación para la formación de gobierno que han tenido lugar en estos últimos años. En esta línea, aunque de un espectro más amplio, se ha hablado de la posibilidad de un Gobierno de unidad nacional, cuyo objetivo fundamental, a nadie se le escapa, sería encapsular a Unidas Podemos y hacer girar hacia la derecha las políticas del país. No en vano toda la derecha se ha manifestado en contra de las medidas sociales del Gobierno. Merece la pena subrayar la última de las estrategias, por su calado y porque, en un principio, ha sido aceptada por el Presidente del Gobierno. Se trata de reeditar los Pactos de la Moncloa, unos pactos que se llevaron a cabo en 1977 entre todos los partidos políticos del momento y que pretendían asentar las bases para la transición del franquismo a la democracia. Pues bien, desde ciertos sectores, especialmente mediáticos, lo que, evidentemente, quiere decir económicos, de los que buena parte de los medios en España son correa directa de transmisión, se reclama esta posible estrategia una vez haya pasado la emergencia sanitaria.

En todo caso, resulta evidente que desde los poderes fácticos del país se va a seguir trabajando intensamente para erosionar al Gobierno de coalición, para evitar que se consolide la alianza entre PSOE y UP, alianza que, por primera vez en mucho tiempo, ha permitido que se implementen amplias medidas dirigidas a la mayoría social, especialmente a los sectores en riesgo de exclusión. Muchos nos preguntamos, con inquietud, qué tipo de políticas se estarían desarrollando en nuestro país si no se hubiera llegado a producir el actual gobierno de coalición y la derecha, o un PSOE sin el suficiente contrapeso a su izquierda que frenara sus tradicionales querencias neoliberales, gestionara los destinos del país en medio de esta terrible crisis sanitaria.

Con las cautelas necesarias, dado que estamos todavía atravesando una situación excepcional, tanto en lo social, como en lo sanitario, como en lo económico, hay indicios que apuntan a que muchas cosas pudieran y debieran cambiar tras este momento de crisis. Momento en el que la palabra crisis, por otro lado, adquiere toda su dimensión etimológica. La misma nos coloca ante ciertos hechos sobre los que resulta imprescindible reflexionar para realizar una apuesta de futuro.

En primer lugar, la crisis ha hecho muy evidente el carácter imprescindible de ciertos sectores para el buen funcionamiento de un país, de una sociedad. En primer lugar, sin ninguna duda, la sanidad, cuyo carácter público y universal se ha mostrado como fundamental para abordar con garantías la pandemia. A pesar de que, con la excusa de la crisis, la derecha neoliberal intentó debilitar la sanidad pública para favorecer al sistema privado, el sistema público de salud ha demostrado una enorme eficacia y altísimas dosis de compromiso social. Paralelamente a ello, algunos sectores de la sanidad privada intentaban que sus trabajadores tomaran vacaciones en este momento, para ahorrarse costes laborales desentendiéndose de la situación de emergencia nacional. Ello ha redundado, en el imaginario social, en una conciencia de la posesión, en la sanidad pública, de un bien imprescindible, de unos profesionales cualificados, de unas infraestructuras robustas que, afortunadamente, estaban ahí para cuidarnos a todos y todas. Pero no solo la sanidad, sino que los suministros eléctricos y de agua, la alimentación, la vivienda, el transporte, han puesto sobre la mesa la importancia de un cierto nivel de control por parte del Estado que garantice la efectividad de derechos reconocidos en nuestra Constitución. Probablemente, el discurso de lo público salga reforzado de esta crisis y ello pudiera ser un punto de apoyo para plantear debates mucho más amplios que permitieran poner en primer plano el problema de lo común como garantía social.

Si el discurso privatizador sale tocado de esta crisis, también pudiera salir del mismo modo el discurso xenófobo, en especial aquel que recurre al mantra de que los extranjeros vienen a robarnos el trabajo. La situación en el campo, la recolección de las cosechas, indispensable para garantizar el aprovisionamiento de tiendas y supermercados, se va a presentar como un serio problema. Ante la imposibilidad de utilizar mano de obra extranjera, se abre una profunda incertidumbre. Desde diferentes sectores se llama a que esa mano de obra sea sustituida por la mano de obra nacional que ha quedado en paro como consecuencia del cierre de actividad declarado. Sin embargo, no parece que esa mano de obra nacional vaya a estar dispuesta a trabajar en las condiciones salariales, y laborales en general, en que lo hacía la mano de obra extranjera. Ello puede provocar dos efectos: la visibilización de la enorme aportación que realiza esa mano de obra extranjera, tan denigrada por la derecha y la extrema derecha, a la economía nacional y un debate sobre las condiciones laborales en el campo español. A mi modo de ver, ambos debates erosionarían la actual visión de la cuestión y nos abrirían la posibilidad de imaginar posibles replanteamientos de la economía agraria, otro de los pilares esenciales para la reproducción social, y el papel de la mano de obra inmigrante.

La crisis ha puesto de manifiesto, por otro lado, la debilidad del tejido productivo nacional, enormemente dependiente del exterior. España se ha mostrado deficitaria en la producción de buena parte del material sanitario imprescindible para abordar la crisis, al tiempo que el mercado ha manifestado sus efectos perversos, expresados en el alza de precios y la incapacidad de satisfacer la demanda. A marchas forzadas ha habido que reorientar la actividad productiva de ciertas empresas para que pudieran abastecer de mascarillas o respiradores al sistema sanitario. Evidentemente, se abre un debate sobre el abastecimiento en una sociedad globalizada.

La crisis, finalmente, y para enlazar con lo que decía al principio, nos da una enorme lección sobre los territorios, poniendo en cuestión, precisamente, la euforia nacional de los patriotas de todo signo que hemos vivido en este país: los virus no conocen fronteras y las respuestas deben desbordar, sin ninguna duda, el ámbito nacional. En tiempos de globalización, las fronteras se hacen tremendamente permeables e intentar encapsular una crisis, ya sea financiera o sanitaria, en el marco de un país o región, es una pretensión quimérica. El espectáculo de desorganización que ha proporcionado la UE es una expresión más del carácter desgraciadamente fallido de su proyecto, lo que debiera llevarnos no a un imposible repliegue nacional, sino a la construcción de un verdadero proyecto colectivo que debe tener vocación cosmopolita. No se trata de cuestionar la globalización, ya incuestionable, sino de gestionarla desde una óptica alejada del neoliberalismo, desde la óptica del común, de los intereses de una humanidad que, ahora más que nunca, es una.

En resumidas cuentas, si, como decía Naomi Klein, el shock es siempre un instrumento para provocar modificaciones en el orden social, quizá el shock que estamos viviendo, por una vez no promovido desde las instancias del poder y, por tanto, no controlado por él, pudiera ser utilizado para repensar profundamente nuestro diseño social, para poner en cuestión esas dinámicas neoliberales que han proporcionado al capitalismo una pulsión suicida. Quizá esta crisis pudiera ser un aldabonazo que permitiera abordar los grandes problemas, ecológicos, económicos, sociales, que ponen en peligro el futuro de nuestro planeta.